

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos Rol Corte Suprema N° 91.583-2021, por sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Ministro en Visita Extraordinaria doña Marianela Cifuentes, en cuanto a la acción penal **absolvió** a **Guido Antonio Emiliano Villa Prieto**, de la acusación formulada en su contra en calidad de autor del delito de homicidio calificado, en grado consumado, cometido en contra de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, el día 21 de junio de 1979, en las inmediaciones de la feria Lo Valledor.

Asimismo, **rechazó** la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por Magdalena Garcés Fuentes, Boris Paredes Bustos y Cristian Cruz Rivera, abogados, en representación de Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, en contra del Fisco de Chile, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Apelada esa decisión, la Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, **confirmó** la sentencia apelada de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, escrita a fojas dos mil seiscientos veintiocho y siguientes que **absuelve** a Guido Antonio Emiliano Villa Prieto y **rechaza** la acción civil en contra del Fisco de Chile, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Considerando:

1º) Que, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dedujo recurso de casación en el fondo amparado en la



causal contemplada en el artículo 546 N° 7 en relación con el artículo 488 N°s 1 y 2 todos del Código de Procedimiento Penal, señala que al acreditar los hechos que configuran las causales de justificación que se declaran concurrentes en beneficio del acusado, se hace con infracción a las normas reguladoras de la prueba. Lo anterior, por cuanto la acreditación de los hechos que han permitido justificar la conducta de Villa Prieto, deriva directamente de una versión exculpatoria introducida tardíamente por el acusado, que resulta controvertida por múltiples antecedentes probatorios allegados al proceso, cuya consideración fue omitida por el tribunal.

Destaca que la versión del acusado es balísticamente incompatible, además de ser contradictoria con las dadas por el acusado al inicio del proceso y por último la versión es incompatible con otras evidencias.

Afirma que al no encontrarse debidamente probada la agresión ilegítima que fundamenta la causal de justificación invocada por el sentenciador de segundo grado, es posible concluir que la conducta desplegada por Villa Prieto no sólo es típica constitutiva del delito de homicidio simple en la persona de Juan Carlos Gómez Iturra, sino también antijurídica y culpable.

Agrega que la exigencia de realidad y, especialmente, de actualidad, que pesa sobre la agresión ilegítima que funda la causal de justificación, resulta de particular relevancia para los presentes antecedentes, desde que el examen del conjunto de la prueba reunida en la causa indica que la actividad desplegada por la víctima respecto de Villa Prieto e Inostroza Molina, no expresa una agresión ilegítima real, y en todo caso, *actual*, que justifique la acción típica realizada por el acusado.



Hace presente que en el caso que el intercambio de disparos verificado entre Juan Carlos Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado, por una parte, e Inostroza Molina, por otra, fuere valorada como una agresión ilegítima de los primeros en contra del segundo, dicha agresión ya había cesado cuando entró en acción el acusado, descendiendo del furgón policial y disparando en contra de la víctima.

Finalmente pide que se declare que la sentencia recurrida es nula, toda vez que se ha verificado el yerro jurídico denunciado por esta parte y, acto seguido y sin nueva vista, dicte sentencia de reemplazo por la cual se condene al acusado Guido Antonio Emiliano Villa Prieto en calidad de autor del delito de homicidio simple cometido en perjuicio de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, a las penas que establece la ley, más accesorias legales y costas de la causa.

2º) Que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo.

En cuanto a la casación en la Forma.

El recurrente, lo funda en la causal contemplada en el artículo 541 N° 9 en relación artículo 500 N° 4 y 5, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Penal. Al efecto, denuncia como primer defecto formal que la sentencia tanto de primera como de segunda instancia no se razonaron sobre la presencia del “elemento de contexto” o “hecho global” característico de los crímenes de lesa humanidad, omitiendo pronunciarse sobre si el presente ilícito constituye un crimen de Derecho internacional, de modo tal que el fallo no pudo ponderar las consideraciones en cuya virtud se dieron por probados los hechos que



configurarían las “*eximentes de responsabilidad*” en caso del procesado Villa Prieto

Como segundo capítulo de casación formal el recurrente señala que las sentencias analizan únicamente como acción idónea para provocar la muerte, el disparo propinado por el acusado, señor Guido Villa Prieto, a la víctima don Juan Carlos Gómez Iturra, sin profundizar en que posteriormente la víctima no recibió atención médica, ni en las consecuencias del actuar o de la omisión del imputado, respecto de quien existía una posición de garante, tanto por su calidad de agente de Carabineros de Chile, como por haber herido de muerte a la víctima.

Sostiene que ni en la sentencia de primer grado, ni en el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel existen argumentos que se hagan cargo de analizar la conducta omisiva de no prestar auxilio a la víctima, no se ponderaron las razones legales y doctrinales que sirven para estimar que nos encontramos frente a un delito de comisión por omisión.

Como tercer y último defecto formal, sostiene que la sentencia contiene omisiones en materia de fundamentación, y razonamientos que no son explicados.

Afirma que el fallo recurrido como hemos dicho no explicita como llegó a las conclusiones que lo llevan a confirmar con declaración la sentencia de primer grado, pues altera el fundamento jurídico para eximir al acusado Villa Prieto, mencionando ahora no la concurrencia de un error de prohibición, sino puramente la legítima defensa propia y de extraños, tampoco se hace cargo de las razones para justificar la versión del inculpado, o bien, para señalar que dejar de revisar si los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad puede ser incompatible con lo resuelto.



En cuanto a la casación en el fondo.

El recurrente se asila de manera conjunta las causales del artículo 546 N° 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, denunciando como infringidos los preceptos legales establecidos en los párrafos 1° y 4° del Título XIX, Libro III del Código de Procedimiento Civil; en conexión con los artículos 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, el artículo 6 literal c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, los artículos 7 N° 1 (a) y (h), 29, 31 y 33 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los artículos 1°, 2°, 8°, 25° y 63° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7° y 9° de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y normas de *ius cogens*, en lo pertinente, en materia de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad, así como en lo relativo a las circunstancias eximentes y su trato diferenciado por el Derecho penal internacional.

Sostiene que el error de derecho se configura al haberse absuelto al acusado Villa Prieto de su participación en los crímenes juzgados, al considerar que concurre una causal de justificación de legítima defensa o un error de prohibición por haber incurrido en infracción a las leyes reguladoras de la prueba al momento de calificar los hechos.

Afirma que los razonamientos que contienen los hechos probados que encuadran los crímenes como un accionar policial exento de reproche, nos parecen equivocados, y susceptibles de encuadrarse en las causales del artículo



546 N° 1 y N° 7 del Código de Procedimiento Penal, pues la se han aplicado de modo improcedente eximentes de responsabilidad, violando asimismo las leyes reguladoras de la prueba, lo que ha tenido como resultado la absolución del imputado Villa Prieto, ya que consideró como justificadas conductas que la ley tipifica como delitos, basado en una versión falsa, y que obligaban, en consecuencia a la condena del imputado, especialmente tratándose de crímenes de lesa humanidad.

Sostiene que la persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una obligación derivada del “ius cogens”. determinar el elemento de contexto de los mismos, sostiene que la eximente de legítima defensa tiene requisitos en el derecho penal internacional que no fueron ponderados por los sentenciadores, para ello cita el artículo 31.1 letra (c) del Estatuto de Roma considera entre las eximentes de responsabilidad criminal, entre otras, a quien: c) *Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado”.*

Por último pide que se declare que concurren los vicios denunciados, o al menos uno de ellos, procediendo a anular y dejar sin efecto la sentencia impugnada, por el vicio de forma en que se ha incurrido y que ha influido



sustancialmente lo dispositivo del fallo y, acto seguido, sin nueva vista de la causa, se sirva dictar la sentencia de reemplazo que crea conforme a la ley y al mérito del proceso, desde ya solicitando que dicha sentencia –de alzada- determine revocar la sentencia de primera instancia, condenando al acusado Guido Villa Prieto en calidad de autor del delito consumado de homicidio de la víctima Juan Carlos Gómez Iturra, imponiéndole la pena que legal y proporcionalmente la Excma. Corte Suprema estime pertinente conforme a Derecho.

3°) Que, las y los querellantes y actores civiles Luz María Gómez Droguett, José Antonio Gómez Urrutia, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, interpone sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, respecto de la parte penal y civil de la sentencia.

En cuanto a la parte penal.

Casación en la forma.

En primer lugar la defensa deduce recurso de casación en la forma amparado en la causal del artículo 541 N° 9 en relación artículo 500 N° 4 y 5 ambas disposiciones del Código de Procedimiento Penal, argumenta que de los hechos se tuvieron por acreditados en el numeral “7° *Que Juan Carlos Roberto Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado fueron introducidos a un furgón policial, vehículo que permaneció en el lugar de los hechos por más de una hora, sin que, entretanto, se proporcionara atención médica a Gómez Iturra.*”

Sostiene que la sentencia no indica, expresa ni desarrolla de qué manera queda comprendida en la legítima defensa propia o de terceros el hecho de que



una persona que haya estado en estado de indefensión, bajo custodia policial, se le deje morir encerrado en un móvil sin prestarle atención médica.

Pide, que se declare la nulidad de la sentencia atacada y dicte, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una nueva sentencia en que se revoque la sentencia definitiva de primera instancia condenando a Guido Villa Prieto como autor del delito de homicidio simple en la persona de Juan Carlos Gómez Iturra, todo con costas.

Casación en el fondo.

La parte querellante sostiene como causal la contemplada en el artículo 546 N° 4 del Código de Procedimiento Penal en relación con los artículos 15 y 391 N° 2 del Código Penal.

Sostiene que existe una clara responsabilidad de autor respecto del procesado, en cuanto cometió delito de homicidio de comisión por omisión, ya que el procesado produjo un resultado lesivo, a consecuencia del cual, surge a su respecto la obligación de realizar acciones tendientes a evitar el resultado lesiva, cuestión que en la especie no aconteció

Concluye solicitando que se anule y deje sin efecto la sentencia recurrida, por los graves vicios de fondo en que se ha incurrido y que han afectaron lo dispositivo del fallo y dictar la sentencia de reemplazo correspondiente, en la que se revoque la sentencia de primer grado condenado al acusado Guido Villa Prieto como autor del delito de homicidio simple en la persona de Juan Carlos Gómez Iturra, hecho ocurrido el 21 de junio de 1979, en contexto de Crimen de lesa humanidad; todo con costas.

En cuanto a la parte civil.



Casación en la forma.

Que en primer término formula casación en la forma denunciado como infringido por los sentenciadores los artículos 541 N° 9 en relación artículo 170 N° 4 ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Sostiene que no se hace mención alguna al aspecto civil del fallo, sencillamente lo confirmó, pero deja argumentos contradictorios para hacerlo, puesto que por una parte indica que el Carabinero actuó de manera inculpable, pero en otro considerando, agregado en la sentencia de segundo grado, sin hacer modificación alguna a dicho fallo, indica que carece de interés analizar la culpabilidad de la conducta.

Pide, que se declare la nulidad de la sentencia atacada y dicte, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una nueva sentencia en que se revoque la sentencia definitiva de primera instancia y en su lugar se dicte otra que acoja la demanda interpuesta en autos, todo con costas.

Casación Fondo

En cuanto al recurso de casación en el fondo el querellante denuncia que existió un error de derecho al no aplicar en su correcto sentido el artículo 2314 del Código Civil. También se incurrió en error de derecho al no hacer aplicación del artículo 2329 del Código Civil, además de no haber aplicado las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Chile que regulan la responsabilidad estatal por el hecho internacionalmente ilícito que surge desde la perpetración de un crimen de Estado y que exige a los Estados reparar las graves vulneraciones a los derechos humanos.



Señala que la reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como un Estado debe hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido; indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras.

Afirma que al rechazarse la demanda civil se infringe el artículo 63.1 de la Convención Americana, que exige la reparación integral del daño producido.

Pide, que invalide la sentencia recurrida por los graves vicios de fondo en que se ha incurrido y que afectaron lo dispositivo del fallo y, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dicte la sentencia de reemplazo correspondiente, en la que se revoque la sentencia de primera instancia en el aspecto civil, acogiendo la demanda de indemnización de perjuicios presentada, todo con costas.

4°) Que, los hechos que ha tenido por ciertos la sentencia impugnada en su considerando 17° -no modificados en alzada- son los siguientes:

“1° Que el día 21 de junio de 1979, a las 08:30 horas, el Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina y el Carabinero Guido Antonio Emiliano Villa Prieto, ambos de dotación de la 17° Comisaría de Carabineros de Chile, realizaban un control vehicular en las inmediaciones de la feria Lo Valledor, puntualmente en avenida Carlos Valdovinos con calle Maipú.

2° Que, a esa hora, Juan Carlos Roberto Gómez Iturra y Carlos Nelson Wevar Delgado, integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario, M.I.R., transitaban por calle Maipú en la camioneta marca Chevrolet, modelo C10, patente WG 7, que había sido sustraída días antes por Wevar Delgado.



3° Que, al percatarse del control vehicular en el lugar antes indicado, Gómez Iturra, conductor de la camioneta, realizó una maniobra evasiva, esto es, un viraje en U, que llamó la atención del personal policial y motivó que se iniciara una persecución.

4° Que, luego, frente al N° 3.506 de calle La Rural, Juan Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado abandonaron la camioneta y huyeron a pie, siendo seguidos de la misma forma por el Sargento 1° Inostroza Molina, quien disparó en su contra, ante lo cual Gómez Iturra y Wevar Delgado respondieron con las armas que portaban, una pistola marca Beretta, calibre 9 mm, serie 684456 y un revólver marca Rossi, calibre .38, serie D 299850, respectivamente, falleciendo Inostroza Molina a causa de una herida de bala tóraco pulmonar y aórtica, provocada por el impacto de un proyectil de plomo calibre .38, disparado por Carlos Wevar Delgado.

5° Que la pistola marca Beretta que portaba Gómez Iturra, tras ser disparada, quedó imposibilitada de seguir funcionando, debido a la dilatación de su cañón, lo que trabó el movimiento de retroceso del carro e impidió la expulsión de una vainilla que quedó encasquillada en su interior.

6° Que, en ese instante, el Carabinero Guido Villa Prieto se acercó con el fin de auxiliar al Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina, quien se encontraba herido y tendido en la calzada, percatándose que Juan Carlos Gómez Iturra lo apuntaba con el arma de fuego que portaba, esto es, con la pistola marca Beretta, calibre 9 mm, serie 684456 que, tras haber sido disparada, se encontraba imposibilitada de volver a percutirse, ante lo cual Villa Prieto efectuó diez disparos con la pistola marca Browning, calibre 9 mm, serie 3001, que llevaba consigo, uno de los cuales impactó el tórax de Gómez Iturra.



7° Que Juan Carlos Roberto Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado fueron introducidos a un furgón policial, vehículo que permaneció en el lugar de los hechos por más de una hora, sin que, entretanto, se proporcionara atención médica a Gómez Iturra.

8° Que, en definitiva, Juan Carlos Roberto Gómez Iturra falleció debido a que el proyectil que lo impactó comprometió ambos pulmones, el bazo y el hígado y causó un sangrado en la cavidad torácica y abdominal.”

A.- Parte Penal

I.- En cuanto a los recursos de casación en la forma de la parte penal.

5°) Que, en relación con el primer y tercer capítulo denunciado como constitutivo de una infracción formal de la sentencia por la querellante AFEP, toda vez que no existió pronunciamiento respecto al elemento de contexto para entender que estamos frente a un delito de lesa humanidad y no haber explicitado los fundamentos para establecer la eximente de responsabilidad penal de legítima defensa.

6°) Que, en lo que concierne a la causal esgrimida por el recurso de nulidad formal, en los términos planteados en el libelo, se configura cuando la sentencia no contiene *"Una exposición breve y sintetizada de los hechos que dieron origen a la formación de la causa, de las acciones, de las acusaciones formuladas contra los procesados, de las defensas y de sus fundamentos; "Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta" y "Las*



razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes".

Por ello, el motivo de invalidación que se alega en el recurso tiene, según constante jurisprudencia, un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que compele la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o la legalidad de las afirmaciones que de él se desprenda.

7º) Que, al respecto cabe señalar que tanto la sentencia de primera como de segunda instancia hicieron referencia directa a la omisión que se denuncia en los recursos de casación interpuestos. En efecto, la sentencia de primera instancia en su considerando 25º señala *"Que, en razón de lo expuesto, se dictará sentencia absolutoria en favor del acusado Guido Antonio Emiliano Villa Prieto, toda vez que, si bien ejecutó una conducta típica y antijurídica, no es posible realizar en su contra un juicio de reproche o culpabilidad, por cuanto actuó bajo un error de prohibición invencible sobre los presupuestos objetivos o fácticos de la causal de justificación de legítima defensa.*

Por lo anterior, carece ya de interés discutir si la conducta ejecutada por Villa Prieto constituye o no un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º del Estatuto de Roma y pronunciarse respecto de las demás alegaciones de las partes, por resultar innecesario o, en su caso, incompatibles con lo resuelto".

Por su parte la sentencia de segunda instancia en su considerando 6º expresa que *"Que, debido a lo expuesto, se dictará sentencia absolutoria en favor del acusado Guido Antonio Emiliano Villa Prieto, toda vez que, si bien ejecutó una*



conducta típica, esta carece de antijuridicidad, al concurrir las causales de legítima defensa propia y en favor de extraños. Luego, por encontrarse la conducta justificada, carece ya de interés el analizar la reprochabilidad o culpabilidad de la conducta. Así también, revisar si reviste o no la calidad de un crimen de lesa humanidad, de conformidad al Estatuto de Roma, y pronunciarse respecto de las demás alegaciones de las partes, por resultar innecesario o, en su caso, incompatibles con lo resuelto”.

Como puede apreciarse el vicio denunciado no es tal, al haber un pronunciamiento expreso en ambas sentencias sobre la omisión reclamada, de modo que la causal invocada sobre la base de estos fundamentos no puede prosperar.

8º) Que, a la falta de razones para dar por acreditada la eximente de responsabilidad penal, de un análisis de la sentencia recurrida la Corte de Apelaciones en sus considerandos tercero y cuarto se exponen los fundamentos para configurar la legítima defensa propia y de terceros señalan lo siguiente; *“Tercero: Que, estamos de frente a un escenario de resistencia armada a un control policial, en el cual Gómez Iturra incluso se encuentra en desventaja numérica y de armas, pues el Sargento Primero Inostroza Molina producto del procedimiento policial, se encontraba desde instantes previos, ya herido y caído.*

Tal como lo sostiene el profesor Garrido Montt en su obra Nociones Fundamentales de la Teoría del Delito, lo esencial en la legítima defensa es que “exista una necesidad de defenderse”, y “esta lo será mientras sea el medio imprescindible para repeler la agresión, y en cuanto se limita a ese objetivo”. Y en palabras de Enrique Cury, Derecho Penal, Parte General Tomo I, “importa que la



reacción sea necesaria, esto es, que, dadas las circunstancias, el sujeto no disponga de otra forma menos enérgica de defenderse con éxito”. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión por Villa Prieto que se cumple en este caso, pues es apropiada a la situación del ataque cruzado enfrentado.

Cuarto: Que, la agresión ilegítima, producto de la resistencia al control policial, se presenta como una situación ineludible para Guido Villa Prieto, quien no la ha provocado, ni tampoco, se ha acreditado, que haya obrado impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo, por lo que con su conducta defiende tanto su integridad corporal y vida propios como la del Sargento Primero Inostroza Molina”.

9°) Que, en el presente caso, sobre este tópico, resulta evidente que la resolución objetada no adolece de las deficiencias denunciadas, toda vez que de un atento estudio de ella aparece una suficiente exposición de los raciocinios que han servido de soporte para la conclusión, acatándose adecuadamente el mandato del legislador.

10°) Que, respecto al segundo capítulo de infracción formal denunciado, que también hace suyo el querellante que representa a las víctimas (hermanos e hijo de la víctima), sustentado en que la sentencia impugnada no se hace cargo de la conducta omisiva del acusado respecto de no haber evitado la muerte de la víctima al no posibilitar la atención médica que ella requería, ello tampoco es posible configurar o advertir.

11°) Que, en efecto, conforme a la solicitud de invalidación formal presentada, la recurrente cuestiona la falta de consideraciones en torno a no



haber dado razones para considerar la participación del procesado en la muerte de la víctima, por su omisión en la prestación de asistencia médica, englobando toda su protesta en la exigencia establecida en el numeral 4° del artículo 500 del Código Adjetivo Penal.

En tal sentido, a propósito del cumplimiento de ello, ya conocida es la uniforme y basta jurisprudencia de este tribunal respecto del cumplimiento de la exigencia a que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, en particular sobre el numerando ya indicado, en cuyo caso se cumple con la exigencia cuando la sentencia contiene las consideraciones pertinentes relativas al establecimiento de la participación punible atribuida al enjuiciado y a los descargos formulados por la defensa, entendiendo que la sanción de nulidad viene asociada a la omisión de dichos raciocinios.

Por lo dicho, el motivo de invalidación que se alega tiene un carácter esencialmente objetivo, y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que compele la ley, sin que corresponda valorar el contenido de los razonamientos.

No se trata, en consecuencia, de una revisión vinculada a la ponderación de la razonabilidad de otras posibles conclusiones o la forma en cómo se valoró el insumo probatorio, ni menos enmendar los errores, falsas apreciaciones o equivocaciones en que pueda incurrirse en la tarea señalada. La apreciación de los elementos de convicción está radicada en forma exclusiva en los jueces del fondo, sin que este tribunal pueda entrar a modificar lo obrado en el ejercicio de esa facultad;

12°) Que, en ese orden de cosas, ante el estudio de la resolución de



segunda instancia, resulta evidente que el fallo cumple con la exigencia previamente descrita, pues, a propósito de la participación del sentenciado Villa Prieto, la sentencia no solo hace suyos los fundamentos de la de primera, sino que, además, en los considerandos 1° a 4°, incorporó razonamientos en torno a los motivos por los cuales ha de entenderse por no configurada su participación culpable en la muerte de la víctima al estimar que se configuraba a su favor la eximente de responsabilidad de legítima defensa, de tal manera que el laudo en cuestión no adolece de la deficiencia denunciada, toda vez que contiene de manera suficiente una exposición de los raciocinios que han servido de soporte a la decisión, por lo que esta Corte no advierte que el tribunal de alzada hubiere incurrido en el vicio formal que se denuncia al confirmar la sentencia apelada, porque contiene los fundamentos que justifican lo resolutivo, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, particularmente a la exigencia de su apartado 4°;

II.- Casación en el Fondo.

13°) Que, cabe referirse al recurso de casación en el fondo interpuesto por el querellante AFEP, denunciado como infringidos los numerales N° 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal

La primera infracción denunciada supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado conforme lo determine el sentenciador, puesto que ella resulta de una imposición al reo de una pena distinta de la que le corresponde, para acto seguido denunciar la infracción contemplada en el 546 N° 7, esto es haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, desconociendo los



hechos asentados por el juzgador, que por el contrario los acepta al esgrimir la primera causal.

Como se ve, cada postulado supone el abandono de la tesis anterior, condiciones en las que el arbitrio no puede ser atendido, porque no cabe dejar subordinada la efectividad de unos vicios a la existencia o inexistencia de otros, desatendiéndose la ritualidad que es propia de este recurso de derecho estricto, el que, por tal motivo, será rechazado (SCS N° 19.165-17, de 27 de septiembre de 2017 y N° 35.788 de 20 de septiembre de 2018; 13877-2019, de 24 de diciembre de 2021; 12820-2019 de 8 de noviembre de 2021).

En efecto, los vicios que constituyen las causales invocadas no pueden proponerse en forma simultánea, pues ello importa que, ante la pluralidad, sea este Tribunal quien opte por alguno de los motivos de nulidad, función que inequívocamente no le corresponde a la Corte.

14°) Que, tal forma de fundar las causales deducidas, esgrimiendo hechos, razones y consecuencias legales incompatibles, no resulta aceptable tratándose de un recurso extraordinario y de derecho estricto como lo es el de casación en el fondo, en el cual cabe demandar, para que esta Corte pueda entrar al estudio y decisión del mismo, que se señale y explique con precisión y fundamento los errores de derecho que se advierten en el fallo, así como su influencia sustancial en su parte dispositiva, todo ello en correspondencia con las solicitudes efectuadas en su petitorio, características de las que carece un arbitrio que, como el revisado, presenta fundamentos y peticiones alternativas y excluyentes, defectos que constituyen un óbice insalvable siquiera para su estudio.



15°) Que, la jurisprudencia a este respecto es, como se ha visto, numerosa y sostenida, contando con decisiones muy recientes, que otorgan sólido respaldo a lo que se resuelve en estos casos, que es el rechazo de los recursos por razones que, si bien son formales, no pueden ser obviadas por esta sala, atendida la función que le está encomendada como tribunal de casación.

Por tal motivo la causal no puede prosperar.

16°) Que, en relación con el recurso de casación en el fondo deducido por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que lo sustenta en la vulneración a las leyes reguladoras de la prueba.

Que, de forma reiterada y sistemática, la jurisprudencia de este Tribunal de casación ha reconocido la soberanía o intangibilidad que mantienen los jueces de fondo en su facultad sobre la determinación de los hechos. Tal postulado le impide a la Corte Suprema rever los hechos y la obliga a aceptarlos. En ese entendido, en su momento se sostuvo que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, puesto que las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de prueba reconocidos como tales*



por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme). En un mismo sentido se resolvió que, “la apreciación de las leyes reguladoras de la prueba a que alude el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, implica la violación de una norma legal relativa a la prueba, pero no a la apreciación de los hechos, que la ley siempre radica, soberanamente, en los jueces de las instancias” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 89, citado por el referido autor).

Como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado, los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y, ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo – cuyo no es el caso de autos –, lo que debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo en el ejercicio de sus atribuciones propias, materia que, como se ha dicho, escapa del control de esta Corte, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresare: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que*



debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”.

Con lo dicho, no cabe sino desestimar el recurso planteado;

17°) Que, en relación con el recurso de casación en el fondo interpuesto por la querellante en representación de las víctimas, amparado en la causal del artículo 546 N° 4 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 15 y 391 N° 2 del Código Penal, se argumenta que existe una clara responsabilidad de autor respecto del procesado, en cuanto cometió delito de homicidio de comisión por omisión, por lo que se requiere un análisis separado y detallado, atendidas las peculiaridades e implicancias de la alegación planteada.

18°) Que, en relación con el vicio denunciado, es preciso tener en cuenta los hechos asentados en la sentencia de primera instancia y confirmados por la sentencia en análisis, en que se estableció lo siguiente:

“6° Que, en ese instante, el Carabinero Guido Villa Prieto se acercó con el fin de auxiliar al Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina, quien se encontraba herido y tendido en la calzada, percatándose que Juan Carlos Gómez Iturra lo apuntaba con el arma de fuego que portaba, esto es, con la pistola marca Beretta, calibre 9 mm, serie 684456 que, tras haber sido disparada, se encontraba imposibilitada de volver a percutirse, ante lo cual Villa Prieto efectuó diez disparos con la pistola marca Browning, calibre 9 mm, serie 3001, que llevaba consigo, uno de los cuales impactó el tórax de Gómez Iturra.

7° Que Juan Carlos Roberto Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado fueron introducidos a un furgón policial, vehículo que permaneció en el lugar de los



hechos por más de una hora, sin que, entretanto, se proporcionara atención médica a Gómez Iturra.

8° Que, en definitiva, Juan Carlos Roberto Gómez Iturra falleció debido a que el proyectil que lo impactó comprometió ambos pulmones, el bazo y el hígado y causó un sangrado en la cavidad torácica y abdominal.”.

19°) Que, la imputación de la producción del resultado a una omisión sólo será posible, para respetar el principio de legalidad criminal y las consiguientes exigencias de tipicidad legal, si se trata de un tipo de delito puro de resultado, en la especie homicidio simple. En segundo lugar, se requiere no un deber genérico de actuación favorecedora como en las omisiones propias, sino un deber jurídico especial de evitar el resultado típico, un deber de garantía; por ello, sólo podrá ser autor quien tenga una posición de garante jurídica, que en la especie deriva de la injerencia o hacer precedente del procesado, haber herido de bala a la víctima. Y, en tercer lugar, la concurrencia de las circunstancias que permiten fundamentar el criterio de equivalencia material con la causación o comisión activa, constituido por la creación o aumento del riesgo o peligro por la omisión misma desde el punto de vista normativo social y jurídico, que en el presente caso se traduce en no haber prestado ningún tipo de asistencia médica a la víctima o haberla procurado.

20°) Que, los delitos impropios de omisión consisten en no impedir un resultado pese al deber de garante que obligaba a actuar para impedir su resultado. Para el profesor Cury, la omisión consiste en no hacer aquello que se tenía el poder final de ejecutar, funcionando lo que llama el principio de inversión, por cuanto lo característico en la omisión es la no conducción de ese acontecer, pese a que se contaba con el poder de manejarlo, con su dominio final.



En cuanto a la tipicidad en la omisión, se puede establecer que estos delitos de comisión por omisión se caracterizan por que la omisión, que no está expresada en el tipo penal en cuanto tal, debe ser apta para que le sea atribuido el resultado previsto comisivamente por la ley, además de cumplir los requisitos correspondientes.

Así, la tipicidad exigida en la comisión por omisión en el caso específico del delito de homicidio, según la profesora Ossandón, está referida al resultado material, por lo que la conducta típica es el comportamiento activo u omisivo al que se le puede atribuir la muerte de otro, siendo determinante para ello el dominio del riesgo por el sujeto y no la causalidad como criterio central de imputación (Ossandón, María Magdalena, “Delitos contra la vida”, en “Derecho Penal. Parte Especial”, Vol. I, Tirant Lo Blanch, pp. 52-53).

21º) Que, en este caso, en primer lugar, la producción del resultado típico que la acción omitida pudo evitar, esto es, la muerte de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, el día 21 de junio de 1979, se produjo luego de haber recibido éste un disparo de bala y pese a ello fue mantenido en custodia en el furgón policial por más de una hora, sin que en ese lapso haya tenido algún tipo de asistencia médica o se haya procurado que la recibiera.

Con lo anterior se puede establecer que existe una vinculación fáctica entre la omisión de Villa Prieto y la muerte de Juan Carlos Gómez, ya que pese a encontrarse herido de bala este último, no se intentó por el procesado que la víctima pudiera haber recibido a tiempo atención médica, pese a la gravedad de las lesiones (y los pedidos de auxilio solicitados por Wevar Delgado al interior del mismo furgón policial).



Por otro lado, como señala Mezger (Mezger: “Derecho Penal. Parte general.”, 6º edición, 1955), la causalidad en el delito omisivo ha de vincularse no a la inactividad del sujeto sino a la acción que se esperaba de él y que no ejecutó, lo que en este caso y a nuestro juicio, también se cumple, es decir, al debido auxilio que debió prestar el procesado al herido por su impacto balístico, teniendo ya el control de la suerte de aquél al mantenerlo en la custodia del vehículo policial, mientras el herido a bala se desangraba. En el mismo sentido, Raúl Zaffaroni (Zaffaroni, Aliaga, Slokar: “Derecho Penal. Parte general.”, 2ª edición, editorial Ediar, 2002, p. 574.), afirma que en la tipicidad omisiva no existe un nexo de causación sino de evitación, generándose el resultado típico por la omisión que se imputa al actor, lo que efectivamente aconteció en la especie, ya que, en el presente caso, no se acreditó ni se realizó por parte del procesado ninguna acción tendiente a evitar la muerte de la víctima, manteniéndose una actitud omisiva mientras el proceso ocurría, según lo establecido por la sentencia del *a quo*.

22º) Que, en el presente caso, Villa Prieto detentaba una posición de garante, es decir que tenía un deber jurídico especial de protección que lo obligaba a evitar el resultado. En la posición de garante existe una relación estrecha entre el omitente y el bien jurídico afectado, es decir, cuando existe un especial deber jurídico del autor que lo obliga especialmente a que no se produzca el resultado.

Estos delitos sólo se pueden cometer por quienes posean determinadas calidades que lo obligan a evitar los resultados lesivos, pues no impedir un resultado puede solamente ser equiparado a un hacer activo cuando para el sujeto existía una obligación específica de actuar con la cual se contaba.



Podemos entender como garante a quien, aunque no esté dispuesto en una ley o contrato, con una conducta previa, ha colocado a la persona en una situación de peligro, o al bien jurídico en una situación de peligro, tal como aconteció en los hechos que se dieron por acreditados, toda vez que, pese a que el procesado disparó a la víctima, hiriéndolo, no hizo nada para evitar la inminente muerte, limitándose a subirlo al carro policial mientras el proceso de desangrado se desarrollaba (y desoyendo además las peticiones de auxilio médico solicitadas por Wevar Delgado desde el interior del furgón policial).

En este contexto, la omisión del procesado es directamente subsumible en el delito de homicidio. Un excesivo formalismo pudiera hacer pensar que la combinación de la no actuación de una posibilidad real, junto con la existencia del deber de garante, sería suficiente para imputar el resultado. Sin embargo, ello no es bastante para fundamentar la equiparación a la comisión por actos positivos, ya que nunca basta la sola omisión, sino el contexto de la situación precedente en que, al asumir la posición de garante, el autor se coloca en la posición de controlar la posibilidad de conjurar el riesgo. La omisión dolosa puede ser equiparada a una acción positiva cuando el autor ha realizado precedentemente acciones que crearon el riesgo para la víctima; como el herir a la víctima poniendo en riesgo su vida. De no mediar la asunción de la posición de garante, la víctima no se vería expuesta a que la omisión la dejara sin protección frente al curso causal que conduce el resultado.

En ese sentido, como indica Gimbernat (Gimbernat Ordeig, Enrique: “La causalidad en la omisión impropia y la llamada “omisión por comisión.”, en ADPCP, tomo LIII, año 2000.), la omisión es el equivalente a la causación activa



del resultado y, por tanto, es comisión directamente subsumible en el tipo correspondiente cuando la propia omisión crea el peligro de lesión para el bien jurídico. Esta característica de los delitos omisivos, a juicio del Tribunal, resulta fundamental en este caso para atribuir el resultado de muerte de la víctima al procesado, ya que conforme quedó establecido por los jueces de la instancia, luego de ser herido de bala la víctima permaneció en el furgón policial por más de una hora, sin que en dicho lapso el procesado haya intentado de alguna forma que la víctima recibiera asistencia médica oportuna.

23°) Que, además, el tipo de homicidio, en tanto delito de resultado, exige que a la ausencia de la acción indicada debe seguir la producción del resultado muerte, como se señaló. Al respecto, la doctrina entiende que es imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un mero no hacer. En estos casos, lo fundamental es la circunstancia de que el agente hubiese podido evitar el resultado dañoso de haber ejecutado la acción indiciada, lo que se determina sobre la base de un juicio de probabilidad hipotética formulado a partir de ciertos criterios valorativos. Para ello pareciera pertinente y suficiente que se aumente el peligro de producción del resultado o, dicho al revés, que la acción debida hubiese disminuido el peligro de producción del resultado y no la certeza de la producción del resultado dañoso, exigencia esta última que sería absurda, ya que su configuración se produciría solo cuando exista absoluta seguridad del éxito de la acción exigida al actor (Ossandón, pp. 54-55).

24°) Que, como se viene razonado, en este caso concurren cada uno de los elementos que configuran la comisión por omisión del homicidio de don Juan



Carlos Roberto Gómez Iturra, por lo que los sentenciadores han incurrido en el error de derecho denunciado, en los términos ya descritos, por lo que la causal será acogida.

B.- Parte Civil.

I.- En cuanto a la casación en la Forma.

25°) Que, en cuanto a la casación en la forma amparado en el causal del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal en relación artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Que, es necesario dejar en claro que la causal de nulidad invocada se configura cuando la resolución no contiene los basamentos en cuya virtud se dan por comprobados o no los hechos atribuidos a los inculcados, o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, eximirse de responsabilidad o atenuar ésta; vale decir, cuando no se desarrollan los razonamientos por los cuales se emite pronunciamiento en relación con el asunto sometido a la decisión del tribunal. Por ello, el motivo de invalidación que se alega por la demandante civil tiene un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo para comprobar si existen o no los requerimientos que compele la ley (SCS Rol N° 20616-18 de 14 de enero de 2021; Rol N° 33547-18 de 23 de agosto de 2021; Rol N° 28310-18 de 21 de septiembre de 2021 y 33661-19 de 25 de junio de 2022).

26°) Que, al respecto, la exigencia del legislador de incluir los razonamientos del juez fallador en sus dictámenes cumple el objetivo de evitar arbitrariedades en sus resoluciones. Para ello se han contemplado las normas relativas a los contenidos de las sentencias y, sobre todo, la sanción a su



vulneración a través del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, por ser la fundamentación de las sentencias una garantía de la correcta administración de justicia.

27°) Que, de un atento estudio de la sentencia impugnada, se constata que ella no adolece de las falencias denunciadas, en los términos acotados en la reflexión anterior, pues dada la recalificación del tipo penal efectuada al de violencia innecesaria causando lesiones graves, el fundamento sexto, en forma concisa, explicita el razonamiento que le sirve de soporte, que refiere en síntesis, que al tratarse de un funcionario policial que hace uso de su arma de servicio, el arma de fuego forma parte del tipo penal.

Que, en relación con el vicio denunciado, es conveniente recordar que lo que estatuyen las normas que se dicen infringidas por la recurrente, en relación con la forma de extensión de las sentencias, es que el pronunciamiento contenga las reflexiones de hecho que le sirven de apoyo, sobre la base de la discusión planteada en el proceso. De esta manera, no resulta posible admitir la solicitud de nulidad de la sentencia dictada con miras a obtener una nueva estimación de los hechos para obtener una conclusión distinta a la de la instancia, ya que ello escapa a un motivo de nulidad como el presente.

Por lo expuesto y dado que el fallo que se impugna ha cumplido con las exigencias que se denuncian omitidas, lo que se advierte de su examen, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, resulta que los defectos en que descansa la motivación de nulidad del libelo no la conforman, porque no existen, no siendo entonces exactas las transgresiones imputadas al fallo en estudio, desde que más que la ausencia de consideraciones se reprueba la fundamentación de los jueces



de la instancia para decidir de la forma en que lo han hecho, por lo que no ha podido configurarse la causal de invalidación formal, la que habrá de ser desestimada.

II.- En cuanto a la Casación en el Fondo.

28°) Que, a efectos de un adecuado análisis y resolución de esta litis, conviene consignar que se acreditaron los siguientes hechos:

“6° Que, en ese instante, el Carabinero Guido Villa Prieto se acercó con el fin de auxiliar al Sargento 1° Nicomedes Inostroza Molina, quien se encontraba herido y tendido en la calzada, percatándose que Juan Carlos Gómez Iturra lo apuntaba con el arma de fuego que portaba, esto es, con la pistola marca Beretta, calibre 9 mm, serie 684456 que, tras haber sido disparada, se encontraba imposibilitada de volver a percutirse, ante lo cual Villa Prieto efectuó diez disparos con la pistola marca Browning, calibre 9 mm, serie 3001, que llevaba consigo, uno de los cuales impactó el tórax de Gómez Iturra.

7° Que Juan Carlos Roberto Gómez Iturra y Carlos Wevar Delgado fueron introducidos a un furgón policial, vehículo que permaneció en el lugar de los hechos por más de una hora, sin que, entretanto, se proporcionara atención médica a Gómez Iturra.

8° Que, en definitiva, Juan Carlos Roberto Gómez Iturra falleció debido a que el proyectil que lo impactó comprometió ambos pulmones, el bazo y el hígado y causó un sangrado en la cavidad torácica y abdominal.”

Tampoco fue discutido por la demandada que los actores sean hermanos y el hijo sobreviviente, sin perjuicio que se acompañaron los certificados de



nacimiento con que se demuestran tales parentescos como consigna el motivo vigésimo octavo del fallo de primera instancia.

Asimismo, tampoco se objetó que producto del fallecimiento de la mencionada víctima, las demandantes civiles hayan sufrido daño moral;

29°) Que, en relación con el daño moral, no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico o, al menos, no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria, por lo que la indemnización de perjuicios sólo tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a las víctimas un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso;

30°) Que, en este entendido, acreditados como han sido la comisión de los delitos, la participación culpable y penada por la ley de los agentes del Estado que intervinieron y la relación de parentesco entre los actores y la víctima, surge la efectividad del padecimiento del daño moral, de manera que el Estado debe reparar ese detrimento, por el hecho de sus agentes. La determinación de este daño concierne a la prudencia del tribunal, lo que no podría ser de otro modo, porque materialmente es difícil, sino imposible, medir con exactitud la intensidad del sufrimiento que provoca la desaparición y la incertidumbre del destino de un familiar en tan repudiabiles circunstancias;



31°) Que, sobre la materia el artículo 24, párrafos 1 y 4, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de personas, establece: *“1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. (...) 4. Los Estados Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada. (...)”*. En tanto, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala: *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. (...)”*;

32°) Que, en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al dictaminar que *“[...] no es suficiente que el Gobierno emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario, además, que toda esta actividad del Gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada”*. (Cfr. CORTE LD.H., Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie CN° 22, Párr. 58);

33°) Que, la indemnización de perjuicios por daño moral, no puede fijarse sino sólo recurriendo a la prudencia de los juzgadores, los que deben observar la realidad de cada caso en particular, especialmente, el impacto que han sufrido los actores producto del hecho y los montos que, en casos similares, se han otorgado,



para así tender a un trato igualitario entre las víctimas que recurren ante los órganos jurisdiccionales y a los baremos obtenidos del estudio de la jurisprudencia existente sobre la materia, como la referida en el fundamento que antecede, que se compadece con la normativa internacional mencionada, establece el derecho de las víctimas a una reparación plena y efectiva y guardan relación con el texto del artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147, de 16 de diciembre de 2005, que obliga al pago de una justa, apropiada y proporcional retribución a los demandantes. Por tal motivo la causal será acogida.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14, 15, 16 y 141 del Código Penal, 13, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, artículos 178, 180 y 186 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 5, 6, 38 y 19 N° 22 y 24 de la Constitución Política de la República, **se decide:**

A.- En lo penal:

I.- Que **se rechazan** los recursos de casación en la forma deducidos por el querellante Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y por los familiares Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra en contra de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.

II.- Que, **se rechazan** los recursos de casación en el fondo deducidos por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en contra de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.



III.- Que **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra y se invalida la sentencia impugnada de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

II. EN LO CIVIL

1.- Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por los familiares Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra en contra de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.

2.- Que, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por los familiares Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra en contra de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Valderrama y la Ministra Sra. Gajardo, teniendo presente para ello lo siguiente;

I.- En cuanto a la acción penal.

1º) Que, en relación con el recurso de casación en el fondo interpuesto por los familiares Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, hermanos e hijo de



Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, amparados en la causal del artículo 546 N° 4 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 15 y 391 N° 2 del Código Penal, ya que argumenta que existe una clara responsabilidad de autor respecto del procesado, en cuanto cometió delito de homicidio de comisión por omisión.

2°) Que, no se ha acreditado en el juicio que el procesado haya tenido algún grado de injerencia en el devenir de los hechos acaecidos con posterioridad al enfrentamiento, en el que además resultó fallecido el acompañante del procesado. Lo anterior es fundamental al momento de atribuirle participación culpable en el resultado de muerte.

3°) Que, a juicio de estos disidentes, no resulta suficiente para establecer la responsabilidad del procesado el hacer precedente del procesado, que en la especie deriva de la circunstancia de un enfrentamiento en el que resultó herida de bala a la víctima. Pero como se indicó no se estableció algún hecho, que permita determinar si la demora en la asistencia médica es imputable a Villa Prieto, existiendo variadas hipótesis que podrían explicar tal resultado.

4°) Que, de forma reiterada y sistemática, la jurisprudencia de este Tribunal de casación ha reconocido la soberanía o intangibilidad que mantienen los jueces de fondo en su facultad sobre la determinación de los hechos. Tal postulado le impide a la Corte Suprema rever los hechos y la obliga a aceptarlos. En ese entendido, en su momento se sostuvo que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de*



ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, puesto que las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de prueba reconocidos como tales por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme). En un mismo sentido se resolvió que, “la apreciación de las leyes reguladoras de la prueba a que alude el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, implica la violación de una norma legal relativa a la prueba, pero no a la apreciación de los hechos, que la ley siempre radica, soberanamente, en los jueces de las instancias” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 89, citado por el referido autor).

Como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado, los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo – cuyo no es el caso de autos –, lo que debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de



ciertos elementos probatorios que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo en el ejercicio de sus atribuciones propias, materia que, como se ha dicho, escapa del control de esta Corte, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresare: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”*.

II.- En cuanto a la acción civil.

5º) Que, en relación con el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la parte civil de la sentencia, toda vez que, al rechazar la demanda civil, no se cumple con la obligación del Estado de la reparación íntegra a la que tiene derecho toda víctima.

6º) Que en relación con la parte civil debemos tener presente lo que se ha razonado previamente respecto de la parte penal, toda vez quedó asentado que la conducta en la cual se sustenta la indemnización reclamada emana de un hecho que no es antijurídico (toda vez que se determinó que se actuó en legítima defensa), esto quiere decir que estamos frente a una conducta permitida o tolerada penalmente por el legislador.

7º) Que si bien el concepto de antijuridicidad difiere en materia civil y penal, ambos se encuentra relacionados, como indica el profesor Riel (*El Efecto de Cosa Juzgada de La Sentencia Penal Absolutoria y Del Sobreseimiento Definitivo en El*



Proceso Chileno de Responsabilidad Civil, Revista Chileno de Derecho Privado, N° 24) "...Sin embargo, la doctrina civil muestra una notoria coincidencia con la ley penal a la hora de establecer cuáles son las excepcionales circunstancias que hacen que un hecho contrario a derecho no sea antijurídico. Hablamos, claro está, de las eximentes de responsabilidad civil, cuya nómina no está en ley civil alguna, a diferencia de lo que sucede en materia penal, en que están contenidas en el art. 10 del Código Penal, sin perjuicio de las llamadas "eximentes supralegales".

Por otra parte, como indica el profesor Rodríguez (2004), p. 152: *"el derecho, por otra parte, debe interpretarse como unidad, lo que excluye vacíos, contradicciones e inconsistencias. Si una persona en el ámbito del derecho penal -siempre protector de valores de alta trascendencia social e individual- justifica una conducta, no puede ella, paralelamente, ser fuente de responsabilidad civil"*

En el mismo sentido, se manifiesta el profesor Cury (2009), p. 812 *"Las causales de justificación, en cuanto eliminan la ilicitud de la conducta, determinan también la exclusión de la responsabilidad civil, pues lo que está autorizado, incluso, ordenado por el derecho, no puede generarla"*.

Que consecuentemente como se ha venido razonando, frente a una sentencia penal firme, que determinó la concurrencia de la legítima defensa respecto de Guido Antonio Villa Prieto en los hechos ocurridos el día 21 de junio de 1979, en las inmediaciones de la feria Lo Valledor, que culminaron con la muerte de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, faltando, por ende, el elemento de antijuridicidad en el hecho que funda la responsabilidad reclamada al procesado y al Estado de manera solidaria.



Por ende, lo resuelto por los sentenciadores de no acoger la demanda de indemnización de perjuicios en el fallo impugnado, no es contrario a derecho y la causal no puede prosperar.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Ferrada y la disidencia de sus autores

Rol N° 91.583-2021.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B., y Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.

LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 04/10/2024 15:33:54

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 04/10/2024 15:33:54

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/10/2024 15:33:55



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 04/10/2024 16:24:00

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 04/10/2024 16:24:01



SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

En cumplimiento de lo ordenado por el fallo de casación que antecede y lo prescrito en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce de la sentencia en alzada, de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se elimina el considerando, trigésimo quinto.

Del fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Rol N° 1172-2021, se eliminan los considerandos 1° a 5°.

Se reiteran, asimismo, los fundamentos 18° a 24° y 28° a 33° de la sentencia de casación que antecede.

Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:

A.- EN LO PENAL.

1°) Que, como se advierte de la lectura de los fundamentos 18° a 24°, que Juan Carlos Roberto Gómez Iturra falleció, resultado que se atribuyó al hacer precedente del procesado consistente en haberlo herido de bala producto de un enfrentamiento entre ambos y pese a que se estableció que hasta dicha acción Villa Prieto obró en legítima defensa, no es menos cierto, que con ello se puso en posición de garante, de manera que se encontraba obligado a realizar acciones tendientes a evitar la muerte de la víctima, cuestión que no realizó.



2º) Que, de esta manera es posible tipificar dicha conducta en el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en grado de ejecución de consumado.

3º) Que, en estos hechos y como se ha explicado latamente al encontrarse el procesado en la posición de garante, de ella deriva su participación a título de autor directo en la muerte de la víctima, conforme lo establece el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

4º) Que, beneficia al acusado Villa Prieto, la circunstancia minorante contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, la que se estima suficientemente configurada con la situación objetiva que dan cuenta el mérito de sus extractos de filiación carentes de anotaciones prontuariales pretéritas que consignen una condena por sentencia firme con anterioridad a la fecha de comisión de los delitos de marras, circunstancia que se tendrá como muy calificada teniendo presente que desde la fecha de los hechos el sentenciado no registra nueva condenas, lo que debe ser ponderado por esta Corte.

5º) Que, considerando las razones antes desarrolladas y para efectos de determinar el *quantum* de la pena a imponer se tendrá presente que:

Que en el caso del acusado, a éste se le condena como autor de un delito de homicidio simple, sancionado con una pena de presidio mayor en su grado mínimo a mayor en su grado medio –a la época de su perpetración-, beneficiándole una atenuante –artículo 11 N° 6, del Código Penal, la que se estimó como muy calificada-; por aplicación del artículo 68 bis del mismo cuerpo legal, la pena se rebajara en un grado desde su mínimo, de forma que la pena a



aplicar resulta ser aquella de presidio menor en su grado máximo, regulándose su quantum en lo resolutivo.

6º) Que, la irreprochable conducta anterior constituye un indicio de menor o nula necesidad de inocuización, intimidación y corrección o resocialización del sujeto, en consideración a que, con anterioridad al delito, ha mantenido un comportamiento acorde a la ley penal y las expectativas ético-sociales imperantes, constituyendo el delito una excepción a su conducta habitual. Es decir, la irreprochable conducta anterior del delincuente funda la atenuación de la pena, basándose en exigencias preventivo-especiales y en los principios limitadores del ius puniendi estatal.

7º) Que, teniendo en consideración la extensión de la pena imponer, concurren respecto del sentenciado los requisitos contemplados en el artículo 14 de la Ley N° 18.216 de la libertad vigilada intensiva.

B.- EN LO CIVIL.

8º) Que, tal como invoca el recurrente la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al actor, por los perjuicio ocasionados por el actuar de un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º y en el artículo 6º de la Constitución Política de la República.



Que, también debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y 3º de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del fallo, quedarían inaplicadas.

Por otra parte, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Así las cosas, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

9º) Que, en relación con la excepción de pago, respecto del hijo de la víctima, cabe tener presente que no existe una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, por lo que no existe motivo alguno para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de



derechos humanos. A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes N°19.234, N°19.992, y N°20.874, no importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. (SCS Rol N° 9755-15 de 21 de junio de 2016; Rol N° 15298-18 de 19 de diciembre de 2018 y Rol N° 15402-18 de 21 de febrero de 2019).

En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en las referidas leyes no pueden ser considerados en la indemnización del daño moral sufrido por el actor y, por ende, no pueden ser considerados para determinar el monto de la indemnización, como indicó la sentencia en su motivo tercero.

10°) Que, a mayor abundamiento, la historia fidedigna de la ley, que sumada a las características de los beneficios que ella otorga, permite concluir que no se logra el mismo propósito que se persigue con la indemnización demandada en autos, como afirma la sentencia recurrida, pues no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado, es que los beneficios pecuniarios obtenidos por el demandante (hijo de la víctima), tienen una naturaleza asistencial y por tal motivo, no privan a las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de



todo daño sufrido, por lo que es manifiesto que se verificó el error de derecho en que se funda el recurso, al descontar de la indemnización de perjuicios por daño moral ordenada pagar a los demandantes, por el Fisco de Chile, lo percibido por el demandante por concepto de las reparaciones establecidas en las Leyes 19.992, 19.234 y 20.874.

Que, en esas condiciones la excepción de pago alegada será desechada.

11°) Que, en relación con la excepción prescripción de la demanda incoada por el Consejo de Defensa del Estado.

La acción civil indemnizatoria por el ilícito en que se fundó la demanda pertenece al ámbito patrimonial, encontrándose, por tanto, regida por el Derecho Civil, toda vez que el Derecho Internacional no excluye la aplicación del ordenamiento nacional sobre la materia, particularmente las reglas contenidas en los artículos 2497 y 2332 del citado Código, que regulan la institución de la prescripción en el área de la responsabilidad civil extracontractual, que es la que se debate en este caso.

12°) Que, es necesario tener en consideración que la acción civil deducida en contra del Fisco de Chile tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado, lo que resulta plenamente procedente, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a



reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política (En este mismo sentido, SCS Rol N° 20.288-14, de 13 de abril de 2015; Rol N° 1.424, de 1 de abril de 2014; Rol N° 22.652, de 31 de marzo de 2015, Rol N° 15.402-18, de 21 de febrero de 2019 y Rol N° 29.448-18 de 27 de agosto de 2019, entre otras).

De este modo, en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de *ius cogens*, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional (SCS Rol N° 8318-18 de 26 de septiembre de 2019, Rol N°29944-18 de 26 de marzo de 2019 y Rol N° 29617-19 de 2 de marzo de 2020).

13°) Que, en cuanto a que lo demandado a título de indemnización por daño moral debe ser legalmente acreditado, se tiene presente que en lo atingente a la prueba del daño moral la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente



económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de esta, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

Así, atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto.

14°) Que, la comprobación de la transgresión o agravio del derecho subjetivo envuelve per se, la prueba de la efectividad del daño moral, de manera que acreditada la calidad de víctima de violaciones a sus derechos humanos por agentes del Estado en la persona de la víctima, forzoso es concluir que se ha producido dicho perjuicio y que debe ser reparado, lo que no podría ser de otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir con exactitud la intensidad con que esas violaciones han afectado al demandante, por la naturaleza del perjuicio producido, de todo lo cual se concluye que, este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter moral que reviste.

En efecto, la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de violaciones a los derechos de una persona en el contexto institucional de la época, a manos de agentes del Estado, lo que produce sufrimiento a esa víctima, lo que debe ser indemnizado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.



15°) Que, la naturaleza del daño moral de que se trata, obliga a que la determinación del monto dinerario que permita de algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que su determinación sea realizada *prudencialmente*, ante la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa evaluación sea arbitraria o antojadiza, sino, por el contrario, que ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación, fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin duda le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a esa decisión, toda vez que de ese modo se justifica lo que se manda a pagar por el fallo.

16°) Que, en relación a que por orden de prelación no corresponde indemnización para los hermanos de la víctima por preterición, es preciso recordar que la pretensión indemnizatoria sostenida por los actores recurrentes ha sido construida sobre la base de la reparación, a título de daño moral, del padecimiento personal sufrido como consecuencia de la muerte de su hermano, haciendo responsable al Fisco por la vía de la responsabilidad extracontractual que le asiste, derivada de los hechos ilícitos objeto del juicio perpetrado en contra de su familiar y, relacionando la normativa interna con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la materia.



17°) Que, se debe tener presente que la pretensión indemnizatoria que se admite en sede penal conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal -de acuerdo a su actual redacción-, presenta como única limitación *“que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal”*, lo que significa una exigencia en el campo de la causalidad, en términos que el fundamento de la pretensión civil deducida, debe emanar de las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal.

En la especie, tal vínculo de causalidad aparece satisfecho, toda vez que son las conductas ilícitas investigadas en autos -cometidas por agentes del Estado- las que subyacen y originan la pretensión civil de estos querellantes y demandantes respecto del Fisco de Chile, por lo que será desechada tal alegación.

18°) Que, no es discutido en el proceso que Luz María Gómez Droguett, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas, son hermanos de la víctima y de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra es su hijo.

19°) Que, a fin de determinar el monto, esta Corte tendrá en consideración el grado de parentesco de cada uno de los demandantes y los montos que se han fijado para casos similares (Rol 82318-2021), en que se distinguió entre los hermanos y los hijos de las víctimas, dado la diferencia en el parentesco con la víctima.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14, 15, 16 y 141 del Código Penal, 13, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, artículos 178,



180 y 186 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 5, 6, 38 y 19 N° 22 y 24 de la Constitución Política de la República, **se decide:**

A.- En lo penal:

I.- Que se revoca la sentencia impugnada de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y en su lugar se dispone que **se condena a Guido Antonio Emiliano Villa Prieto**, como **autor** del delito de homicidio simple de Juan Carlos Roberto Gómez Iturra, a sufrir la pena de **cinco años** de presidio menor en su grado máximo; a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

II.- Que, por reunirse los requisitos previstos en el artículo 15 bis de la Ley N° 18.216, se concede al condenado Guido Antonio Villa Prieto, el beneficio alternativo de la libertad vigilada intensiva, estableciéndose como plazo de tratamiento y observación ante la autoridad administrativa el tiempo de la condena impuesta, debiendo cumplir además las restantes exigencias a que se refiere el artículo 17 de la misma ley. Si por cualquier motivo hubiesen de cumplir las penas de presidio que les han sido impuestas, no existen días que abonar en la presente causa.

B.- En lo Civil:

Se revoca la sentencia apelada de veintidós de marzo de dos mil veintiuno y en su lugar se dispone que, **se acoge** la demanda presentada por Luz María Gómez Droguett, José Antonio Gómez Urrutia, Cecilia Gómez Urrutia, José



Manuel Alejandro Gómez Iturra y Miguel Alejandro Gómez Larenas en contra del Estado de Chile en los siguientes términos:

a) Respecto de Luz María Gómez Droguett, José Antonio Gómez Urrutia, Cecilia Gómez Urrutia, José Manuel Alejandro Gómez Iturra, hermanos de la víctima, se fija la indemnización en la suma de veinte millones de pesos (\$20.000.000)

b) Respecto de Miguel Alejandro Gómez Larenas, hijo de la víctima, se fija la indemnización en la suma de cuarenta millones de pesos (\$40.000.000)

c) Las sumas que se ordenan pagar, lo serán con los reajustes e intereses establecidos en la sentencia de primer grado.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Valderrama y la Ministra Sra. Gajardo, teniendo en consideración lo expuesto en la sentencia de casación, que los llevo a rechazar todos los recursos interpuestos en contra de las sentencia de segunda instancia.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Ferrada y la disidencia de sus autores.

Rol N° 91.583-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B., y Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama y el Abogado Integrante Sr. Gandulfo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal y ausente, respectivamente.



LEOPOLDO ANDRÉS LLANOS
SAGRISTÁ
MINISTRO
Fecha: 04/10/2024 15:33:56

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE
MINISTRA
Fecha: 04/10/2024 15:33:57

JUAN CARLOS FERRADA BORQUEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 04/10/2024 15:33:57



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 04/10/2024 16:24:02

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN
MINISTRO DE FE
Fecha: 04/10/2024 16:24:02

